Una hoja de ruta para mejorar la política alimentaria

Los niveles actuales de indigencia en Argentina indican que el acceso económico a los alimentos por parte de la población en situación de vulnerabilidad es el problema alimentario prioritario. Un piso de protección social en Argentina debe incluir como componente fundamental a las políticas alimentarias.

MENSAJES CLAVE



Nuestro país ha vivido en "emergencia alimentaria" durante los últimos veinte años. Se trata de un tema central de la agenda social prácticamente desde la salida de la crisis de 2001. En un contexto de crecimiento de la pobreza extrema, se torna central discutir la hoja de ruta para mejorar la política alimentaria, identificando puntos prioritarios y el papel que podrían jugar los distintos niveles de gobierno en la agenda alimentaria. Desde Fundar presentamos un diagnóstico de los distintos modos en que el Estado nacional aborda la cuestión alimentaria e identificamos puntos clave que constituyen oportunidades de mejora para avanzar en un piso de protección que garantice el acceso a la alimentación.

- El documento reconstruye los principales componentes de la política alimentaria del Estado nacional. En síntesis, de cada 10 pesos que se gastan: 8 corresponden a la Prestación Alimentar, 1,5 a la asistencia alimentaria directa, que se canaliza mediante prestaciones en especie y transferencias económicas y los 0,5 pesos restantes corresponden al resto de los programas nacionales.
- El foco de la cuestión alimentaria en la actualidad está en asegurar ingresos que garanticen el umbral más básico: el acceso económico a los alimentos. Analizamos la Prestación Alimentar e identificamos cinco problemas de diseño: 1) excluye a adolescentes de entre 15 y 17 años; 2) la suma de las transferencias por AUH y Alimentar no alcanzan para cubrir la línea de indigencia; 3) ofrece montos de magnitud diferencial y decreciente según cantidad de NNYA en el hogar sin ninguna razón que justifique este esquema; 4) no tiene un criterio definido de actualización frente a la inflación; 5) genera desigualdad con respecto a los trabajadores formales de menores ingresos, que no perciben ninguna asignación comparable con la Prestación Alimentar. El desacople entre AUH y AFH ha agravado esta situación.



Políticas alimentarias

2

APORTES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

Una hoja de ruta para mejorar la política alimentaria tendría que incluir los siguientes aspectos:

- Priorizar las transferencias monetarias por sobre las transferencias en especie. El Estado nacional debería priorizar las transferencias monetarias por sobre las transferencias en especie, en función de principios de eficiencia y transparencia. Las transferencias monetarias tienen menores costos de implementación, son más transparentes y dan mayores opciones para decidir qué comprar y cómo comer.
- 2. Unificar transferencias por niño: ampliar Alimentar y cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Proponemos unificar la cobertura de la Prestación Alimentar con los criterios de transferencias de la AUH. Esto implica alcanzar a todo el universo de 0 a 17 años y que la suma de ambas prestaciones sean equivalentes a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Asimismo, la CBA constituye un criterio general de referencia para actualizaciones, tomando en cuenta las disparidades regionales en el poder de compra.
- 3. Avanzar hacia una mayor protección para evitar los desincentivos a la formalidad. Es imprescindible que el sistema de protección social tenga una articulación virtuosa con la dinámica del mercado de trabajo. En un contexto de caída de los salarios, el diseño actual genera inequidad en los tramos bajos de la escala salarial y excluye a una población de niños y adolescentes que viven en hogares con situaciones económicas adversas. Para los tramos inferiores de salario formal, se debe equiparar el monto de asignaciones familiares al que perciben los destinatarios de la AUH y Alimentar.

- 4. Priorizar el gerenciamiento local de la asistencia alimentaria directa. Esto es clave para evitar el solapamiento de ayudas por parte de los distintos niveles de gobierno y para que las distintas jurisdicciones tomen distintos ejes de la política alimentaria correspondientes a sus problemáticas específicas. Los gobiernos locales tienen mayor capacidad para detectar situaciones críticas de vulnerabilidad que requieren asistencia directa. Por último, el gerenciamiento local reduce los costos operativos de intermediación asociados a la compra centralizada de alimentos y garantiza una mejor adecuación a los usos y costumbres alimentarias de la zona.
- 5. Promover el componente de educación nutricional. La alimentación saludable es una condición contribuyente de la prevención de enfermedades crónicas con efectos sociales agregados importantes. El incremento de la presencia de alimentos aportantes de nutrientes esenciales, la reducción de alimentos de baja calidad nutricional y la ingesta adecuada de calorías acorde al requerimiento, implican la mejora de la calidad nutricional.

 \leftarrow

Lecturas recomendadas



 Britos, S., Borg, A., Güiraldes, C., Simonetti, C., Oliveri, E., y Chichizola, N. (2018). <u>Diseño de una canasta saludable de</u> <u>alimentos y criterios para una evaluación comparativa de</u> <u>precios y densidad de nutrientes</u>. <u>Diaeta</u>, 36(164), 20-29.

- FAO (2023). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Urbanización, transformación de los sistemas agroalimentarios y dietas saludables a lo largo del continuo rural-urbano. FAO.
- Schipani, A. y Forlino, L. (2024). <u>Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina</u> 2023. CIAS-Fundar.



Este informe se desprende del documento Migliore, M. y Poy, S. (2024). Una hoja de ruta para mejorar la política alimentaria. Fundar.



www.fund.ar

info@fund.ar